

CONTESTACIÓN DE DEMANDA_11001310502320230026600_FABIOLA HERRERA DIAZ C.C. 51854743

notificaciones@taborabogados.com <notificaciones@taborabogados.com>

Mié 6/03/2024 15:27

Para: Juzgado 23 Laboral Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato23@cendoj.ramajudicial.gov.co>; smeza@mezacadenaasociados.com <smeza@mezacadenaasociados.com>; fabiola.herrera@americnadecolchones.com <fabiola.herrera@americnadecolchones.com>
CC: vmejia@taborabogados.com <vmjia@taborabogados.com>; 'TABOR ABOGADOS COORDINACION' <taborcoordinacion@gmail.com>; gerencia@taborabogados.com <gerencia@taborabogados.com>; 'DEFENSA JUZGADO 19 LABORAL TABOR' <defensajuzgado19@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (3 MB)

11001310502320230026600_FABIOLA HERRERA DÍAZ_CONTESTACIÓN DE DEMANDA CON ANEXOS.pdf;

2024_3254024

Señor:

JUZGADO VEINTITRÉS (23°) LABORAL DEL CIRCUITO BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL.

E. S. D.
REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

RADICACIÓN: 11001310502320230026600

DEMANDANTE: FABIOLA HERRERA DIAZ C.C. 51854743

DEMANDADOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, AFP PORVENIR S.A., AFP PROTECCIÓN S.A., AFP COLFONDOS.

De la manera más atenta, y dentro de los términos procesales oportunos nos permitimos remitir la contestación dentro del proceso de la referencia, junto con el poder de sustitución, copia de la escritura pública, expediente administrativo relacionado dentro del acervo probatorio del cuerpo de la contestación de la demanda en un solo archivo.

Así mismo me permito indicar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 806 de 2020, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la demanda con sus respectivas pruebas y anexos, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones, esto es, al correo electrónico del apoderado: smeza@mezacadenaasociados.com y demandante: email: fabiola.herrera@americnadecolchones.com

Solicitamos que a la vuelta de este correo nos acuse su recibo



MARÍA CAMILA RÍOS OLIVEROS
Gerente

Elaborado por: **TANIA ZULEIMA PALACIOS**
Correo: notificaciones@taborabogados.com

📞 Celular: (+57) 3172504841
Carrera 7 #16- 56, Oficina 804
Edificio Calle Real
Santafé de Bogotá - Colombia

www.taborabogados.com



Señor:

2024_3254024

JUZGADO VEINTITRÉS (23°) LABORAL DEL CIRCUITO

BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL.

E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

RADICACIÓN: 11001310502320230026600

DEMANDANTE: FABIOLA HERRERA DIAZ C.C. 51854743

DEMANDADOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, AFP PORVENIR S.A., AFP PROTECCIÓN S.A., AFP COLFONDOS.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

KEVIN DAVID MORA RODRIGUEZ, abogado en ejercicio, debidamente identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado judicial sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES - cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo con la sustitución de poder otorgada por la doctora **MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS**, en su calidad de apoderada principal de la entidad demandada, tal y como consta en el poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y
DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el doctor, **JAIME DUSSAN**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la **Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.**

2. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 31 del CPT y de la SS, me permito pronunciarme respecto a los hechos de la siguiente manera, con el fin de que se fije el litigio en cada uno de ellos, atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad y a que los hechos que se tomen como ciertos no constituye prueba de confesión.

AL HECHO PRIMERO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO SEGUNDO; ES CIERTO, Es cierto, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO TERCERO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO CUARTO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO QUINTO; NO ME CONSTA, toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce si la información contenida en el formulario de afiliación aportado con el escrito demandario es veraz, al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias particulares del momento; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO SEXTO; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP DAVIVIR, hoy AFP PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias particulares del momento; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO SÉPTIMO; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias desventajosas del RAIS; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO OCTAVO; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias particulares respecto de escenarios comparativos de pensión en los dos regímenes; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.



AL HECHO NOVENO; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce si los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. concia al momento del traslado de régimen, el número de semanas cotizadas al RPM.

AL HECHO DECIMO; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce si los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. concia al momento del traslado de régimen, el promedio salarial de cotización de la demandante.

AL HECHO ONCE; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias desventajosas del RAIS; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO DOCE; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias desventajosas del RAIS; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO TRECE; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO CATORCE; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP COLFONDOS al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias desventajosas del RAIS; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO QUINCE; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO DIECISÉIS; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce la información brindada por los asesores de la AFP PORVENIR S.A. al momento del traslado de régimen, con relación a las circunstancias desventajosas del RAIS; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO DIECISIETE; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO DIECIOCHO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.



AL HECHO DIECINUEVE; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO VEINTE; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO VEINTIUNO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO VEINTIDÓS; NO ME CONSTA; toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, mi representada desconoce si la AFP COLFONDOS no ha emitido respuesta respecto de la solicitud elevada por la demandante; adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

AL HECHO VEINTITRÉS; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO VEINTICUATRO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

AL HECHO VEINTICINCO; ES CIERTO, conforme al expediente administrativo de la demandante y los documentos aportados al libelo demandatorio.

3. HECHOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

EXCEPCIONES DE MERITO.

En aras de salvaguardar los intereses de la entidad a la que represento y al haberme opuesto a todas y cada una de las declaraciones y pretensiones incoadas por la parte demandante, me permito proponer las siguientes excepciones:

3.1. IMPROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE NULIDAD O INEFICACIA EN EL CASO PARTICULAR.

Es de señalar que el traslado de los aportes enunciados anteriormente se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó, suscribiendo los formularios para efectuarlo, voluntad que se vio ratificada con los más de 20 años que ha realizado cotizaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, limitó este



derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuviera 15 años cotizados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (1 de abril de 1994), para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, situación que el demandante no cumple para su retorno automático.

Ahora bien, sobre la constitucionalidad de las anteriores restricciones se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

"El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes".

Desde esta perspectiva dice la Corte Constitucional:

Que dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al concepto constitucional de Equidad (C.P. art 95), sino también al principio de eficiencia pensional, el cual consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de seguridad social."

Así mismo, revisado el expediente administrativo de la demandante, no se observa solicitud alguna concerniente al traslado que hubiera podido solicitar ante COLPENSIONES, o alguna posible solicitud de la información sobre las diferencias entre un régimen y otro con anterioridad al año 2023, atendiendo a que peticionaba que la afiliación fuera nula, situación que permitió establecer que para la data en la que elevó dicha solicitud ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

3.2. IMPROCEDENCIA DE REQUERIR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA INEXISTENTE AL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL REALIZADO POR LA PARTE ACTORA.



Respecto del deber de información que recae en cabeza de las administradoras de pensiones, es preciso recordar que las demandadas no desconocen su existencia desde el año 1993, con el expedición de la ley 100 de 1993 y el del decreto 663 de 1993, sin embargo es de resaltar que dicho deber se intensifica con la expedición de la ley 1328 de 2009, en donde el deber de información se convierte en un deber de asesoría y buen consejo, por lo que no es dable requerir las mismas formalidades en la asesoría previa al traslado desde el momento mismo de la creación del régimen de ahorro individual con solidaridad y darle el mismo alcance que el legislador y la jurisprudencia le han dado con el transcurso del tiempo.

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

3.3 DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGITIMAS

Para el caso que nos ocupa debe indicar que según lo señala la sentencia C-596 de 1997

“Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho”.

De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 130 de 2013 indicó que:

“Más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994.

Lo anterior por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con

sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna”.

Es claro que en este asunto no estamos frente a derechos adquiridos por lo que debe recordarse que las figuras señaladas tienen consecuencias jurídicas bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

3.4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES TAMBIÉN RECAEN EN CABEZA DEL AFILIADO COMO CONSUMIDOR FINANCIERO.

No debe desconocerse que el vínculo contractual generado a partir de la selección y afiliación a uno u otro régimen pensional, genera obligaciones reciprocas, tal y como lo establece el artículo 1495 del código civil, en los siguientes términos:

“ARTICULO 1495. DEFINICIÓN DE CONTRATO O CONVENCIÓN. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.”

De esta manera no se puede desconocer que el afiliado también tiene obligaciones para con la administradora de pensiones que elija, tal y como lo ha determinado el decreto 2241 de 2010, que es su artículo 4º enuncia los deberes de los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones, dentro de los cuales se resalta:

- “1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo Sistema de Administración de Multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.
2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.
3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso.”

Conforme a lo anterior, es evidente que el deber de información se integra, por una parte, con la obligación de asesoría y buen consejo que deben suministrar las administradoras de pensiones a los posibles afiliados, pero también con la información que deben adquirir de manera autónoma los consumidores financieros, acerca de las condiciones, modalidades y sistemas que integran los regímenes pensionales, que permita tomar decisiones, con el

debido cuidado y atención que merece la decisión por ejemplo de afiliarse, trasladarse o escoger una modalidad particular, acorde a las expectativas pensionales de cada afiliado.

3.5. ANÁLISIS DE CADA CASO EN PARTICULAR CON MIRAS A EVITAR REGLAS GENERALES Y AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA – ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO RIGOBERTO ECHEVERRY BUENO, SENTENCIA CSJ SL 1452 DE 2019, RAD. 68852.

En atención a los múltiples pronunciamientos que han realizado nuestras altas cortes, en los que se han fijado parámetros para el análisis de las pretensiones tendientes a la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se puede dejar de lado la particularidad de cada caso, que también ha sido objeto de análisis por parte de los órganos de cierre, en el presente asunto, nos encontramos frente a una persona capaz, consiente y con unas calidades académicas y profesionales particularmente altas, que permiten establecer que la decisión que tomo durante la afiliación al RAIS, estuvo precedida de la información necesaria para concluir que el traslado realizado era la opción más viable para sus intereses futuros, en ese entendido, no puede considerarse que factores como la fluctuación en el mercado de trabajo, evolución de los salarios de la parte actora y otras variables que representan mayor o menores réditos, sean razones suficientes para considerar que no se le suministro toda la información necesaria para predecir las consecuencias en su futuro pensional, así lo expuso el Magistrado Rigoberto Echeverry Bueno en la aclaración de voto que realiza en la Sentencia CSJ SL 1452 de 2019, cuando indica:

"(...) existen otros eventos en los que no es posible visualizar perjuicios inmediatamente derivados de la decisión del traslado, de manera que las presuntas falencias en la información no producen un efecto cierto o por lo menos determinable en ese momento. Ante tales supuestos, el afiliado debe someterse a las condiciones del sistema por el que optó y puede verse beneficiado o perjudicado, en función de factores como su fluctuación en el mercado de trabajo, la evolución de sus salarios y otras variables que bien le pueden acarrear mayores o menores réditos, respecto de las prestaciones que hubiera podido conseguir en otro régimen. Estos casos, en mi criterio, deben quedar abrigados por la decisión del trabajador y su apuesta por la construcción del derecho en determinado régimen, de manera que no pueden generar la ineficacia del traslado (...)

Por otro lado, la conveniencia de pertenecer a un régimen o a otro, resulta clara para los casos que ha estudiado la Corte Constitucional, cuando una persona perdía la transición, o para quienes habían cumplido uno de los dos requisitos dispuestos en la ley para alcanzar la pensión en el régimen de prima media o incluso para quienes tenían una expectativa cercana de acceso a la prestación, y en dichas condiciones no se encuentra el demandante.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. (El subrayado es nuestro).

Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido.

Ahora bien, en el caso de que la falta de información se hubiera basado en que las AFP PROTECCIÓN S.A, AFP COLFONDOS y la AFP PORVENIR S.A., no realizaron una proyección pensional a la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ, al momento de su traslado, preciso resulta indicar al despacho, que las proyecciones pensionales no son pruebas útiles para demostrar un eventual vicio en el consentimiento al momento en que decidió su afiliación dentro de las opciones que la ley le daba. Sumado a ello, dicha obligación de emitir por parte de las AFP herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, es decir, con posterioridad al traslado de la demandante.

Además, el mencionado Decreto en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

"Parágrafo 2º. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia".

Ahora bien, como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento al demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el supuesto silencio de las AFP PROTECCIÓN S.A., AFP COLFONDOS Y la AFP PORVENIR S.A. en estos puntuales aspectos constituya falta en el deber de información.

3.6 LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA NO PUEDE SER APLICADA EN FORMA GENÉRICA, SIN NINGUNA PONDERACIÓN, Y EN DESIGUALDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012, es evidente que quien afirma la ocurrencia de un hecho, es quien debe soportar probatoriamente la carga que ello genera, de tal forma que la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, no obstante lo anterior, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Para determinar quién es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular. Así la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió también de manera deliberada y consciente no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Para el caso que nos ocupa, es preciso analizar las particularidades del caso, así:

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Igualmente, si bien existe una intervención de asesoría de la administradora de pensiones que podría generar un vicio en la voluntad del traslado, ello debe demostrarse pues de lo contrario predominarían las conjeturas y suposiciones, y no los hechos debidamente demostrados en el proceso en los que intervino directamente el demandante.

No pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, la misma ley previó distintos deberes en cabeza de los mismos con el fin de que por interés propio se asesoren de la mejor manera. Adicionalmente no pueden desconocerse las situaciones que rodean cada caso y que de alguna manera le permitían al demandante obtener información mínima durante el paso del tiempo. La Corte Constitucional en sentencia T

122 de 2017 ha indicado, en este sentido y en diversas providencias que nadie puede alegar su propia culpa a favor:

"Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reproachable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación."

Con lo señalado hasta ahora, debe considerarse que la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada providencia C 086 de 2016:

"Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez"

De tal forma que evitar reglas automáticas que permitan el traslado de régimen pensional bajo cualquier condición y aprovechándose de la imposibilidad que tiene la parte demandada de probar un hecho que ni la legislación ni la jurisprudencia exigían configurar para el momento del traslado, resulta necesario y procedente en el presente asunto, dadas las particularidades del caso.

3.7.NO ES DABLE ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY, PARA JUSTIFICAR UNA DECISIÓN TOMADA HACE MÁS DE 20 AÑOS.

Por otra parte, observando que el demandante manifiesta que la falta de información también radica en que no se le explicaron las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual, debe precisarse que las características, condiciones y modalidades pensionales propias de este régimen están consignadas en los artículos 59 y siguientes de la ley 100 de 1993, norma que por ser de alcance nacional impone su conocimiento a todos los ciudadanos a partir de su promulgación en los términos del artículo 11 del Código Civil, por tanto no es dable alegar la ignorancia como excusa a voces de lo que prevé el artículo 9 de la Codificación antes citada, para atribuir a las AFP PROTECCIÓN S.A., AFP COLFONDOS y la AFP PORVENIR S.A. la responsabilidad de haber omitido información al respecto ya que este señalamiento lo hace la ley, máxime cuando la



demandante de manera voluntaria suscribió el formulario de afiliación al RAIS.

De otro lado, si su señoría concluyera que le asiste razón al demandante y ordena el respectivo traslado entre regímenes, debe decirse que para el respectivo traslado de aportes se debe cumplir con lo normado en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

“ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización”.

En consecuencia, de lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente al Despacho, desestimar estas pretensiones, absolviendo a mi representada de cada una de ellas.

Finalmente, no puede desconocerse el gran problema que puede generar el traslado indiscriminado de afiliados que, excusándose en presuntas faltas al deber de información de las administradoras de pensiones, pretenden acceder a una prestación en el régimen de prima media con prestación, cuando no han guardado fidelidad al sistema; es importante tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema Pensional, del cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, indicó:

"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado.

Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y

circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; la Corte indicó:

"(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que, una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)"

Aunado a lo anterior, es de recordar que el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida, tienen diferente forma de distribución del monto de los aportes, pues recordemos que mientras en el RPM el 13% de los aportes son destinados a financiación de pensión de vejez y reservas y el 3% a pensión de sobrevivientes e invalidez y gastos de administración, en el régimen de ahorro individual con solidaridad tan solo el 11.5% del aporte va dirigido a la cuenta de ahorro individual con solidaridad, el 3% para seguros previsionales y gastos de administración y 1.5% al fondo de garantía de pensión mínima, por lo que el eventual traslado de lo consignado en la cuenta de ahorro individual con solidaridad, no corresponder porcentualmente a lo que en el régimen de prima media se destina para la financiación, en este caso de la pensión de vejez.



De igual manera es evidente que han pasado muchos años en los cuales el demandante no contribuyo con el fondo común que financia las pensiones de las personas que han guardado fidelidad al régimen de prima media con prestación definida, ello conlleva al detrimento patrimonial que pretende evitar el principio de sostenibilidad financiera, pues basta con citar el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, que a su vez incremento el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipulo que:

“ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

(...) El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales”

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipulo:

“Artículo 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización”

Conforme a lo anterior, es evidente que el eventual traslado de régimen pensional de la demandante, afecta significativamente el sistema financiero del RPM, teniendo en cuenta la variación porcentual de la destinación del aporte en ambos regímenes pensionales, la falta de contribución del demandante al fondo común que financia las pensiones en el RPM y la carga que generaría en los demás afiliados soportes un eventual reconocimiento pensional a favor del demandante, quien no ha construido un derecho pensional en el régimen de prima media.



4- LEGISLACIÓN APLICABLE AL CASO

Artículo 2 DE LA LEY 797 DE 2003.

Es necesario precisar para el caso que nos ocupa, que la demandante se encuentra inmerso en una prohibición preceptuada en el artículo en mención, mismo que reza lo siguiente:

“Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

Revisando los hechos de la demanda, se tiene que el demandante, a la fecha de solicitud de traslado del RAIS al RPM, ya se encontraba inmersa en la prohibición de que trata el artículo 2 de la ley 797 de 2003 por estar a menos de 10 años de cumplir la edad mínima exigida por la Ley para acceder a esta prestación, por lo que se enmarca su situación en la norma antes citada, de allí que COLPENSIONES, actuando bajo los preceptos normativos, negó el pretendido traslado.

ARTÍCULO 113 DEL LA LEY 100 DE 1993.

“Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;
- b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización”.

De la norma en cita se desprende que no basta con trasladar los aportes realizados



efectivamente cotizados al Fondo Privado de Pensiones, sino que la AFP debe emitir el respectivo bono pensional donde se incluya el saldo de la cuenta individual y los rendimientos, para luego si realizar la respectiva aprobación del traslado de régimen y de aportes.

SENTENCIA C-1024 de 2004.

En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

INCISO 4º ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 / SENTENCIA C 789 DE 2002 y ARTICULO 3º DEL DECRETO 3800 DE 2003.

La ley 100 de 1993 en su artículo 36, estableció el régimen de transición para aquellas personas que, a la entrada en vigencia de la citada ley, esto es 1 de abril de 1994, acreditaran bien sea el cumplimiento de la edad, 35 años para las mujeres y 40 años para los hombres o 15 años de servicio o cotizaciones. Sin embargo, en el inciso 4º del artículo en mención, se estableció la inaplicabilidad del régimen de transición para quienes se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Posteriormente, este inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002, bajo el radicado C789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, estableciendo que el régimen de transición no será aplicable a quienes se trasladen al régimen de ahorro individual, con excepción de quienes acrediten haber tenido 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, requisito que ha sido reiterado en sentencia C 1024 de 2004 y SU 062 de 2010.

ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993:

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas

personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen (...)"

LEY 71 DE 1988:

"A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas".

DECRETO 3800 DE 2003:

"Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional (...)

ARTÍCULOS 9, 11, 1509 Y 1754 DEL CÓDIGO CIVIL:

Ante las manifestaciones que sirvieron de sustento al contestar las pretensiones de la demanda, es claro evidenciar que estamos en presencia de una negligencia por parte del demandante, teniendo en cuenta que desconoce los preceptos normativos que contiene la Ley de seguridad social (Ley 100 de 1993), al indicar que las AFP son las que tienen la



obligación de informar sobre ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al cual se encuentra válidamente afiliado a la fecha. Y es que esta situación configura un desconocimiento de la norma en mención, misma que a voces del artículo 9 de la Codificación Civil, no sirve de excusa para declararla absuelta de cualquier culpa o error que haya conocido, máxime cuando en la Ley 100 de 1993, se evidencia la explicación y funcionamiento de los regímenes existentes en nuestro sistema de seguridad social.

Y es que el pilar de la presente acción es la omisión de las AFP demandadas, por cuanto estas, se hicieron presente en la antesala de la afiliación a la presente data en la que el demandante aún se encuentra afiliado, interregno en el cual, debe de conocer por su propia cuenta la norma que regula el régimen para el cual efectúa sus aportes, pues el artículo 11 del Código Civil es claro al manifestar que los efectos de la ley se surten a partir de la promulgación de estos, lo que hace imperioso el conocimiento de la norma que regula los derechos, deberes y obligaciones como afiliado de un régimen, el cual, sin lugar a equívocos regula el artículo 59 y s.s. de la ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas su señoría, en el presente asunto no se puede configurar un vicio del consentimiento, por cuanto se configura un ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO, el cual no vicia el consentimiento de las partes, al ser claro el contenido de la ley que regula el funcionamiento de los regímenes pensionales existentes.

No se puede pasar por alto que, al suscribir un formulario de afiliación, medió el consentimiento de la parte contratante, situación que puede declararse nula al evidenciarse un vicio en el ya mencionado consentimiento, mismo que puede ser saneado con el paso del tiempo tal como lo preceptúa el artículo 1754 del Código Civil:

“RATIFICACIÓN TÁCITA: La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada”.

Vemos entonces claramente, como el Código Civil regula el saneamiento de la nulidad, que para el caso de marras se dio con la ratificación tácita del demandante al permanecer al RAIS, efectuando los aportes a los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

SL 373 DE 2021:

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el



régimen de ahorro individual.

A este respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexionó que, al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al estatus quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a:

“Disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.

Porque no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales.

En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucren a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

En conclusión, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación que deberá verificarse en el caso de la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ.

Razones por las cuales, no debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, deberá Absolverse, a Colpensiones de todas aquellas incoadas en su

contra.

4. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias de la demandante y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** de todas y cada una de las peticiones que en su contra se formulan, por las razones que se esgrimen en los acápites de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian a continuación y se condene al demandante al pago de las costas incluyendo agencias en derecho en los términos del numeral 1 del artículo 365 y 366 del C.G.P. en aplicación analógica prevista por el Artículo 145 del C.P.T.S.S.

DECLARATIVAS

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO, Que se declare que la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ, fue mal asesorada al momento del traslado por la AFP DAVIVIR hoy AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1994; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello



implicaba, y no fue sino hasta después de más de 20 años de encontrarse afiliado y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO, Que se declare que la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ, fue mal asesorada al momento del traslado por la AFP COLFONDOS en el año 2000; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de 20 años de encontrarse afiliado y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO; ME OPONGO, Que se declare que la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ, fue mal asesorada al momento del traslado por la AFP PORVENIR S.A. en el año 2007; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la



posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de 20 años de encontrarse afiliado y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

A LA PRETENSIÓN CUARTA; ME OPONGO; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que el demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de

la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es

ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSIÓN QUINTA; ME OPONGO; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que el demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que el demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de 20 años de encontrarse afiliado y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

CONDENATORIAS:

A LA PRETENSIÓN PRIMERA; ME OPONGO, a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que la demandante FABIOLA HERRERA DÍAZ, de manera libre, consiente y voluntaria se trasladó del al RAIS, prueba de ello, es la suscripción del formulario de afiliación, y la manifestación preimpresa de haber recibido del asesor, la información concerniente a las características, beneficios, consecuencias e implicaciones de trasladarse al RAIS, único



documento exigido a los fondos pensiones al encontrarse vigente el Decreto 663 de 1993, que no fue desconocido, ni tachado de falso.

Es importante no desconocer que la demandante se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la ley 100/1993, y que limitó la libertad de escoger o seleccionar entre los dos regímenes pensionales, cuando se encuentre a menos de 10 años para cumplir el requisito de edad de pensión, en este caso, se observa que nació **08 de enero de 1967**, lo que exonera a mi representada de recibir y aceptar al accionante como afiliado en el RPMD, de lo contrario, iría en detrimento del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, generando una descapitalización del fondo común administrado por Colpensiones, al imponer una carga prestacional a favor de quien no ha cotizado por más de 20 años al sistema estatal.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA; ME OPONGO, a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que la demandante FABIOLA HERRERA DÍAZ, de manera libre, consiente y voluntaria se trasladó del al RAIS, prueba de ello, es la suscripción del formulario de afiliación, y la manifestación preimpresa de haber recibido del asesor, la información concerniente a las características, beneficios, consecuencias e implicaciones de trasladarse al RAIS, único documento exigido a los fondos pensiones al encontrarse vigente el Decreto 663 de 1993, que no fue desconocido, ni tachado de falso.

Es importante no desconocer que la demandante se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la ley 100/1993, y que limitó la libertad de escoger o seleccionar entre los dos regímenes pensionales, cuando se encuentre a menos de 10 años para cumplir el requisito de edad de pensión, en este caso, se observa que nació **08 de enero de 1967**, lo que exonera a mi representada de recibir y aceptar al accionante como afiliado en el RPMD, de lo contrario, iría en detrimento del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, generando una descapitalización del fondo común administrado por Colpensiones, al imponer una carga prestacional a favor de quien no ha cotizado por más de 20 años al sistema estatal.

A LA PRETENSIÓN TERCERA; ME OPONGO, a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que la demandante FABIOLA HERRERA DÍAZ, de manera libre, consiente y voluntaria se trasladó del al RAIS, prueba de ello, es la suscripción del formulario de afiliación, y la manifestación preimpresa de haber recibido del asesor, la información concerniente a las características, beneficios, consecuencias e implicaciones de trasladarse al RAIS, único documento exigido a los fondos pensiones al encontrarse vigente el Decreto 663 de 1993, que no fue desconocido, ni tachado de falso.

Es importante no desconocer que la demandante se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la ley 100/1993, y que limitó la libertad de escoger o seleccionar entre los dos regímenes pensionales, cuando se encuentre a menos de 10 años para cumplir el requisito de edad



de pensión, en este caso, se observa que nació **08 de enero de 1967**, lo que exonera a mi representada de recibir y aceptar al accionante como afiliado en el RPMD, de lo contrario, iría en detrimento del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, generando una descapitalización del fondo común administrado por Colpensiones, al imponer una carga prestacional a favor de quien no ha cotizado por más de 20 años al sistema estatal.

A LA PRETENSIÓN CUARTA; ME OPONGO; Condenar a COLPENSIONES a aceptar y recibir el traslado de los aportes de la señora FABIOLA HERRERA DÍAZ; Toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSIÓN QUINTA; ME OPONGO, a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que la demandante FABIOLA HERRERA DÍAZ, de manera libre, consiente y voluntaria se trasladó del al RAIS, prueba de ello, es la suscripción del formulario de afiliación, y la manifestación preimpresa de haber recibido del asesor, la información concerniente a las características, beneficios, consecuencias e implicaciones de trasladarse al RAIS, único documento exigido a los fondos pensiones al encontrarse vigente el Decreto 663 de 1993, que no fue desconocido, ni tachado de falso.

Es importante no desconocer que la demandante se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la ley 100/1993, y que limitó la libertad de escoger o seleccionar entre los dos regímenes pensionales, cuando se encuentre a menos de 10 años para cumplir el requisito de edad de pensión, en este caso, se observa que nació **08 de enero de 1967**, lo que exonera a mi representada de recibir y aceptar al accionante como afiliado en el RPMD, de lo



contrario, iría en detrimento del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, generando una descapitalización del fondo común administrado por Colpensiones, al imponer una carga prestacional a favor de quien no ha cotizado por más de 20 años al sistema estatal.

A LA PRETENSIÓN SEXTA; ME OPONGO, a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que la demandante FABIOLA HERRERA DÍAZ, de manera libre, consiente y voluntaria se trasladó del al RAIS, prueba de ello, es la suscripción del formulario de afiliación, y la manifestación preimpresa de haber recibido del asesor, la información concerniente a las características, beneficios, consecuencias e implicaciones de trasladarse al RAIS, único documento exigido a los fondos pensiones al encontrarse vigente el Decreto 663 de 1993, que no fue desconocido, ni tachado de falso.

A LA PRETENSIÓN SÉPTIMA; ME OPONGO, a cualquier condena ULTRA Y EXTRA PETITA que pueda darse en la presente Litis, en tanto el demandante no acredita los presupuestos facticos y jurídicos que den lugar a que se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado efectuado del RPM al RAIS, más aún cuando mi representada no ha dado lugar a ningún hecho o pretensión aludido por el demandante; así mismo las prerrogativas que otorga la legislación laboral, deben darse bajo los presupuestos del Art. 50 Del Código Sustantivo del trabajo y de la seguridad social, así como dentro de los límites que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral.

A LA PRETENSIÓN OCTAVA; ME OPONGO; Respecto a las costas procesales, solicito no aplicar objetivamente el artículo 365 del CGP pues Colpensiones es un sujeto exógeno a este litigio, por tanto no incurrió en la desatención de sus obligaciones para ocasionar el mismo, además de esto, se debe tener en cuenta el numeral 8 del mencionado artículo aduce: "Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación", por lo que faculta al operador jurídico a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustrada sus pretensiones procesales, pues de imponer esta condena, se estaría generando una descapitalización infundada de mi representada además de trasgredir el principio de sostenibilidad financiera preceptuado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Aunado a esto, es dable precisar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del expediente: 12736 del año 2000, M.P. Doctor GERMAN G. VALDES, cambió su criterio, bajo el entendido de que Colpensiones en este tipo de procesos actúa de buena fe, conforme lo indican las características de sus funciones y, por tanto, debe declararse exenta de culpa, razón por la cual no es dable la procedencia de dicha condena.

6. EXCEPCIONES PERENTORIAS

6.1. APLICACIÓN DEL PRECEDENTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA SL 373 DEL 2021.

Carrera 7 # 16-56 - Oficina 804
Edificio Calle Real – Santafé de Bogotá
(+57) 3172504841
notificaciones@taborabogados.com



Propongo esta excepción, para que se tenga en cuenta la morigeración efectuada al precedente, claro en establecer que no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación equivalente a la devolución de saldos.

6.2. EL ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO NO VICIA EL CONSENTIMIENTO.

Encuentra vocación de prosperidad esta pretensión por cuanto el artículo 1509 de la codificación Civil manifiesta que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, y es claro que la demandante en los términos de los artículos 9 y 11 ibídem al trasladarse al RAIS tenía la obligación de conocer la ley 100 de 1993, pues dentro de este cuerpo normativo se establece de manera clara y precisa el funcionamiento de dicho régimen pensional así como también el de Prima Media con prestación definida, para que por su propio raciocinio tomara la decisión de permanecer afiliado al ISS o trasladar sus aportes, por lo tanto no puede decir que hubo un vicio del consentimiento, en especial cuando se trata de un supuesto ocultamiento de la información, pues si bien la H. Corte Constitucional ha indicado que las Administradoras de Fondo de Pensiones tienen el deber del buen consejo, lo cierto es que el afiliado o quien pretende ser afiliado no puede desconocer la norma ya citada pues la misma es obligatorio conocimiento para su aplicación y la demandante se escuda en un desconocimiento de la norma que los términos del artículo 9 del Código Civil no la exime de responsabilidad alguna tanto de sus derechos como de sus obligaciones.

6.3. PRESCRIPCIÓN:

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidas por la demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedaran cobijado por el fenómeno jurídico de la prescripción y la caducidad. Prescripción establecida en el art 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

6.4. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes del accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad.



6.5. COBRO DE LO NO DEBIDO:

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquí demandados, en razón a que la demandante no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

6.6. BUENA FE:

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que:

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

6.7. INEXISTENCIA DEL DERECHO

En razón que el traslado se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó su afiliación al RAIS, igualmente la actora se encuentra inmersa en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 para trasladarse de régimen.

6.8. INNOMINADA O GENÉRICA:

Solicito al señor Juez que, si encuentra probados hechos que constituyan una excepción, se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del C.G.P aplicado por analogía según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

7. NO PROCEDENCIA AL PAGO DE COSTAS EN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ORDEN PÚBLICO

Sin que de manera alguna pueda considerarse aceptación de los hechos y pretensiones de la demanda, se solicita al Despacho, que, bajo los siguientes parámetros legales, que permiten al fallador de instancia abstenerse de esta condena por las razones y fundamentos de derecho que relaciono así:



En primer lugar, solicito la aplicación del Artículo 48 de la Constitución Política que prescribe:

“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

En este punto resalto el inciso 4 de este artículo en el que se refiere que no se podrán destinar los recursos de mí representada para fines diferentes a ella, por lo cual es dable interpretar, que el pago de Costas y agencias en derecho serían contrarios a esta preceptiva constitucional.

Ahora bien, el legislador en el artículo 365 del C.G.P en su numeral 5, otorgó a los jueces, la posibilidad de no imponer las costas procesales en casos en que prosperen parcialmente las pretensiones como se observa de la siguiente cita

“Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad de la jurisdicción ordinaria laboral, los



procesos Ejecutivos en contra de mi representada, se basan en el pago de costas, por lo que, la no condena de estas evitaría la congestión judicial, salvaguardando principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, amparados bajo el principio de legalidad.

8. PETICIÓN ESPECIAL

Sin el ánimo de aceptar alguno de los supuestos planteados en la demanda, solicito al despacho que de no acceder a los planteamientos de la defensa y ante la eventual declaratoria de nulidad y/o ineficacia y condena de aceptar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, dicha condena este supeditada al traslado efectivo de la totalidad de valores consignados en la cuenta de ahorro individual con solidaridad del demandante, así como los dineros destinados a seguros previsionales, gastos de administración, rendimientos, fondo de garantía de pensión mínima y fondo de solidaridad pensional de aplicar al caso de la AFP PORVENIR S.A. y cualquier otro fondo donde estuvo afiliado la demandante y que fueron suprimidos o fusionados con la AFP mencionada.

Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos pensionales que pueda llegar a adquirir el demandante en el régimen de prima media con prestación definida, deben ser consecuencia del traslado efectivo de los aportes del demandante a Colpensiones, pues de no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por el demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones, es por ello que solicito que de ser adverso a los intereses de mi representada, en el fallo se incluya la obligación de aceptar el traslado del demandante una vez se haga el traslado efectivo de los aportes realizados en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

9. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de prueba de las excepciones propuestas las siguientes:

9.1. DOCUMENTALES

Copia del expediente administrativo de la parte demandante **FABIOLA HERRERA DÍAZ** e historia laboral el cual se remite como archivos adjuntos anexos a la presente demanda debidamente nombrados.

9.2. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito se cite a la parte demandante **FABIOLA HERRERA DÍAZ**, para rendir interrogatorio de parte que formule en la hora fecha establecidas por su despacho, para probar la inexistencia de falta de información o configuración de vicios en el consentimiento.



9.3. OFICIOS O EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

9.3.1. Conforme al artículo 265 del Código general del Proceso solicito se oficie o se ordene a la AFP PORVENIR S.A. con el fin que exhiba y allegue las siguientes certificaciones:

9.3.1.1. Certificación donde se evidencie el total de los descuentos por concepto de gastos de administración realizados mes a mes de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante su afiliación.

9.3.1.2. Certificación donde se evidencien todos los contratos con su respectivo valor de los seguros provisionales realizados por la AFP con las aseguradoras, para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte y cualquier otro riesgo que generó durante su afiliación.

9.3.1.3. Certificación donde se evidencia el valor del bono pensional si lo hubiere a favor de la parte actora durante su afiliación.

9.3.1.4. Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de garantía de pensión mínima durante su afiliación.

9.3.1.5. Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de solidaridad pensional durante su afiliación.

9.3.1.6. Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales del demandante mes a mes durante su afiliación.

9.3.1.7. Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales del demandante mes a mes durante su afiliación.

Lo anterior con el fin de determinar los valores exactos que han sido descontados de la cuenta de ahorro individual del afiliado, poder tasar efectivamente la cuantía de la presente demanda, igualmente son necesarios en caso que se profiera sentencia condenatoria con el fin de tener exacta claridad de los valores que debe recibir mi representada y sobre ellos poder liquidar una posible indexación a favor de Colpensiones tal como se pide en el capítulo 8, petición especial, de la presente contestación.

De no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por el demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones.



9.4 OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS

Las que el señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza:

“Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes”.

10. SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito al Señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

“En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.”

11. ANEXOS

- 11.1.** Escritura pública N° 1186 del 17/05/2023 de la Notaría 02 del Círculo de Bogotá mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le otorga facultades de representación judicial a la firma Tabor Asesores Legales SAS, la cual se encuentra representada legalmente por la Abogada María Camila Ríos Oliveros.
- 11.2.** Sustitución de poder otorgada por la Doctora María Camila Ríos Oliveros para actuar en el proceso de la referencia.

12. NOTIFICACIONES

El demandante en la dirección aportada al proceso.

Mi poderdante, en la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, carrera 10 No.72-33 torre B piso 11 Bogotá y en el correo electrónico notificacionssl@mejiayasociadosabogados.com



El suscrito apoderado judicial en la secretaria de su Despacho y en el correo electrónico notificaciones@taborabogados.com; ssaid@taborabogados.com

Del señor Juez,

Cordialmente,

KEVIN DAVID MORA RODRÍGUEZ.
C.C. 1.085.313.938 de San Juan de Pasto (N).
T.P. 315218 del C.S. de la J.



Señor:

2024_3254024

**JUZGADO VEINTITRÉS (23°) LABORAL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL.**

E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

RADICACIÓN: 11001310502320230026600

DEMANDANTE: FABIOLA HERRERA DIAZ C.C. 51854743

DEMANDADOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, AFP
PORVENIR S.A., AFP PROTECCIÓN S.A., AFP COLFONDOS.

ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.026.275.391 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de la firma **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S.**, bajo el NIT 900.442.223-7 sociedad con domicilio principal la ciudad de Bogotá constituida mediante Documento Privado del 1 de junio de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011, con el No. 01485654 del Libro IX., actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado mediante la Escritura Pública No. 1186 del 17 de mayo de 2023 de la Notaria segunda (02) del Circulo de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito **SUSTITUYO** poder al Doctor (a) **KEVIN DAVID MORA RODRIGUEZ** igualmente mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.313.938 de San Juan de Pasto y portador de la Tarjeta Profesional No. 315218 del Consejo Superior de la Judicatura, el apoderado queda revestido de las mismas facultades otorgadas a la suscrita, como las conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar a este poder y de las demás facultades que sean necesarias para el cumplimiento de este mandato, según lo establece el Art. 77 del C.G.P

En consecuencia, sírvase reconocer personería a el Doctor(a) **KEVIN DAVID MORA RODRIGUEZ**, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted, respetuosamente,

Acepto,

MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS
C.C. No. 1.026.275.391 de Bogotá D.C.
T.P. No. 272.749 del C. S. J.

KEVIN DAVID MORA RODRIGUEZ
C.C. No. 1.085.313.938 de San Juan de Pasto
T.P. No. 315218 del C. S. J.

República de Colombia

1
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DE BOGOTÁ, D.C.

Código: 110010002

(Resolución 1626 de 2002, art. 2 S. N. y R.)

La veracidad de este documento podrá ser
verificada en la plataforma del VUR página
www.vur.gov.co repositorio de poderes.

Código de verificación: 1684524TTT56

Fecha: 19 MAY 2023



NOTARIA SEGUNDA
DE BOGOTÁ D.C.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

DE FECHA:

DIECISIETE (17) DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL.

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE:

PODERDANTE:

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE.

NIT. 900.336.004-7

APODERADO:

TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. NIT. 900.442.223-7

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintitres (2023), ante el despacho de la Notaría Segunda (2ª) del círculo de Bogotá D.C., cuyo Notario Encargado es DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO, según Resolución No. 07267 del 23 de Junio de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro, se otorga la presente escritura pública que se consigna en las siguientes cláusulas y

para ser notarial para uso exclusivo de la escritura pública - fin tiene costo para el usuario

13-04-23 PC010522735

13-04-23 PC010522735

términos.=====

COMPARECENCIA:

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA:=====

Compareció **DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número CC 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, en nombre y representación de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, en los siguientes términos:=====

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que *"tampoco termina*

República de Colombia

3

el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." ==

CLÁUSULA SEGUNDA. – El representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** =====

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, **CLÁUSULA TERCERA.** – Ni el representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. ===== Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, por parte del representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. =====

CLÁUSULA CUARTA. – Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, con NIT. 900.336.004-7. =====

**** HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA ****

ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: El (los) otorgante (s)

señala el/los para uso exclusivo en la escritura pública - Sin tiene costo para el notario

PC010522736

PC010522736

PC010522736

PC078933222

08-02-23 PC078933222

PC08TWSKAG

THOMAS GIBBS & SONS

manifiesta (n) bajo la gravedad de juramento, que se entiende aceptado con la firma de la presente escritura pública, que SI da(n) su consentimiento para ser notificados por medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).====

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE: 1. Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, números correctos de sus documentos de identificación, y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y los otorgantes lo aprueban totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud. 3. Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. 4. Que serán responsables civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. **ADVERTENCIA NOTARIAL:** A los otorgantes se les hizo la advertencia que una vez firmado este instrumento la Notaria no asumirá correcciones o modificaciones si no en la forma y casos previstos por la Ley, siendo esto solo responsabilidad de los otorgantes.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por los comparecientes y advertidos de su formalidad, lo hallaron conforme con sus intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y lo firmaron junto con el suscrito notario quien da fe y lo autoriza.=====

La presente escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números: =====
PO010522735 – PO010522736 – PO010522737 =====

Valor de los derechos Notariales:	\$74.900 =====
Superintendencia de Notariado y Registro:	\$7.950 =====
Cuenta Nacional del Notariado:	\$7.950 =====
I.V.A.	\$44.747 =====
Resolución 00387 de fecha 23 de enero de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro =====	

**ACTA DE REPARTO NOTARIAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

Ordinario, Guiría Catalogada

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
postmordicados@colpensiones.gov.co
Carrera 109 T2-13 Torre A

2023-05-09 09:58:58

0000469 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA
LA MATRICULA NO ES REAL DADO QUE PERTENECE A UN PODER GENERAL PARA REPRESENTACION
LEGAL

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones 900 525 004-7 Tabor Asesoría Legales
S.A.S. 900 442 225-7
postmordicados@colpensiones.gov.co
macanillanico@gmail.com

9774

2023-05-09 10:33:35

SEGUNDA FOLIO

Ordinario, Guiría Catalogada

67539549405862C36D164B4405007

CIUDAD MARCA - BOGOTÁ

BOGOTÁ

0

0

50C-50000

CARLOS ENRIQUE MELENDEZ MONTAÑO

Director de Administración Notarial

Verificar en sistema

<https://www.sncr.superintendenciaderegiro.gov.co/verificar-acta-ordinaria-regular-467539549405862C36D164B4405007.pdf>

Código:
GME-GD-FR-05 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 203
PISO 57 - T2 520121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.superintendenciaderegiro.gov.co>
correspondencia@superintendenciaderegiro.gov.co



PC078933221

08-02-23 PC078933221

OEPOSND08

THOMAS GREGG & SONS



La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co por su código de verificación

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

NIT: 900336004-7

NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012092076 del 28 de septiembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012. Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5. Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

ED961061.0M

08-02-23 PC078933220

IMPRESO EN COLOMBIA

PC078933220

República de Colombia

Modelo notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente, quien será su representante legal. PARAGRAFO 1. El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), deberá cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, cualquiera de los Vicepresidentes o por el Gerente de Defensa Judicial de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021). **FUNCIONES DEL PRESIDENTE.** Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, o través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados, especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarias y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponde a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las





La validez de este documento puede verificarse en la página www.supfinanciera.gov.co con el número de FDI

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Jaime Dussan Calderon Fecha de inicio del cargo: 26/01/2023	CC - 12102957	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Javier Eduardo Guzmán Silva Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018	CC - 79333752	Suplente del Presidente
Diego Alejandro Urrego Escobar Fecha de inicio del cargo: 10/02/2022	CC - 79983390	Suplente del Presidente
Oscar Eduardo Moreno Enriquez Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019	CC - 12748173	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020289549-000 del día 1 de diciembre de 2020, que con documento del 12 de noviembre de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 019 del 12 de noviembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Elisa Moron Baute Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019	CC - 40790026	Suplente del Presidente

Calle 7 No. 4 - 48 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.supfinanciera.gov.co

Página 3 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



PC078933219

08-02-23 PC078933219

W07MTV02PU

THOMAS GRIFFIN & SONS

República de Colombia

¡Bajo el lema "País seguro" se garantiza la seguridad jurídica, el orden público y la confianza en las instituciones del Estado.

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVEDES
SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."





Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 2023007044
Valor \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: R2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TABOR ASESORES LEGALES SAS
NIT: 900442223 7 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02106183
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NITF: Grupo III.

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2022.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 76 N 28 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: macamilarioso@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3006957607
Teléfono comercial 2: 3004844662
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 76 N 28 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: macamilarioso@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3006957607
Teléfono para notificación 2: 3004844662
Teléfono para notificación 3: No reportó.

Página 1 de 3



06-02-23 PC078933218

YHE73P4VJ0

THOMAS GARCIA S. GARCIA

República de Colombia

Paquet notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 0023047044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 02304704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de junio de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011, con el No. 01485654 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MESA&PUERTO ABOGADOS SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2016, con el No. 02105975 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MESA&PUERTO ABOGADOS SAS a CPH INVERSIONES SAS.

Por Acta No. 14 del 16 de marzo de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2019, con el No. 02436957 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CPH INVERSIONES SAS a TABOR ASESORES LEGALES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Resolución No. 2022-01-191323 del 30 de marzo de 2022 de Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2022 con el No. 02877710 del Libro IX y por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Razón Nr. 823067044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02949400 del Libro IX, la persona jurídica de la referencia se reactivó.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la La Sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la sociedad podrá A) ofrecer un servicio integral y especializado de asesoría, consultoría y representación en las áreas del derecho, contables, tributarias, sector inmobiliario, gestión empresarial, la asesoría integral a nivel empresarial y la representación judicial de personas jurídicas y naturales en litigios ordinarios y arbitrajes. B) Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, representar, dar o tomar en arrendamiento a otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles, celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtenerlos fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa, constituir sucursales y sociedades filiales nacionales y fuera del país para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas dentro del objeto social, C) Adquirir poseer y dar en arrendamiento o a título oneroso traslativo o no de dominio, equipos, instalaciones, máquinas, muebles u otros implementos o activos destinados a la dotación, funcionamiento y explotación de establecimientos que hagan relación con cualquier tipo de actividad lícita, D) La inversión en sociedades o empresas de cualquier naturaleza o especie de la sociedad mercantil E) Adquisición, posesión y exportación de patentes, nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial, conceder su exportación a terceros mediante licencia contractual o adquirir de ellos concesiones para su explotación directa o a través de otras sociedades. F) Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y conseguir registros de marcas, patentes y privilegios o cederlos a cualquier título. G) Adquirir como propietario o a cualquier otro título todo tipo de bienes, derechos

Página 3 de 3



PC078933217

08-02-23 PC078933217

ADWKBFC089

THOMAS LINES & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Recibo No. 3823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

económicos o litigiosos, carteras de forma individual o de manera masiva. Enajenar toda clase de bienes o inmuebles, así como darlos o tenerlos en arrendamiento, pignorarlos o hipotecarlos según el caso. H) Adquirir o hacer toda clase de instalaciones industriales o comerciales relacionadas con el objeto social, tales como fábricas, talleres, almacenes de distribución o venta. I) Enajenar, arrendar, gravar y administrar en general los bienes que corresponden al patrimonio social. J) Contratar para sí o como cedeatras, préstamos, girar, endosar, descontar, toda clase de títulos valores y celebrar en general toda clase de operaciones relacionadas con títulos de crédito, civiles o comerciales que reclamen en desarrollo de los negocios sociales. K) Aportar sus bienes, en todo o en parte, a otra u otras sociedades en que le convenga vincularse para el mejor desarrollo de su negocio. L) Intermediar como agente, accionista, representante, consultora, corredora o factor y cualquier otra forma de mandato inherente con las actividades y operaciones relacionadas con sus negocios. M) Asesorar a personas naturales y jurídicas, nacionales o del exterior, en el manejo eficiente de recursos en materia económica, financiera, administrativa y comercial. En general, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier tipo de actividad comercial o civil lícita, tales como las contempladas dentro del artículo 20 del Código de Comercio.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$200.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00
Valor nominal	: \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 2823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La Sociedad tendrá un Gerente y será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales por un (1) suplente, elegidos por la Asamblea de Accionistas para periodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles en cualquier tiempo. El Gerente será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección y administración de los negocios sociales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo como representante legal y en especial: A. Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general. B. Ejecutar las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse para el cumplimiento del objeto social sujetándose a los estatutos y las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. C. Representar a la sociedad ante terceros, judicial y extrajudicialmente y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella intervenga. D. Constituir apoderados que representen a la sociedad judicial o extrajudicialmente. E. Servir de consultor y asesor en la asamblea de accionistas en todas las actividades de la sociedad. F. Celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines sociales sin límite de cuantía. G. Orientar de acuerdo con las decisiones de la asamblea de accionistas todas las actividades de la sociedad. H. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando un número plural de acciones que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito le solicite que convoque a asamblea general. I. Dentro de la delegación que le haga la asamblea de accionistas, organizar lo relativo a la administración del personal, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. J. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, las cuentas, inventarios y el balance general de cada ejercicio para su aprobación o aprobación acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, lo mismo que un

Página 3 de 3

República de Colombia

Plapel notarial para uso exclusivo de registros de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



PC078933216

08-02-23 PC078933216

T4RAJ99EHD

THOMAS URRUTIA & CIA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Recibo No. 823047044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82304704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

proyecto de distribuciones de utilidades repartibles y los demás datos que exige la ley. R. Presentar balances y un informe sobre la marcha de los negocios con la periodicidad que le indique la asamblea de accionistas. L. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un proyecto de apropiación de las reservas que ordenan las disposiciones legales. M. Cuidar de la recaudación de los fondos sociales. N. Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre las operaciones de la sociedad y presentarle detalladamente los informes que esta solicite. O. Cumplir y hacer cumplir que se cumplan oportunamente todas las resoluciones de la asamblea general como los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad y p. Todas las demás funciones que señalen la ley, los estatutos o le delegue la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949425 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Maria Camila Rios Oliveros	C.C. No. 1026275391

Por Acta No. 13 del 18 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2019 con el No. 02436685 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Paola Fernanda Ayala Salamanca	C.C. No. 1151937659

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Resibo No. A833047044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2306704465426

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 007 del 9 de julio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02003197 del 16 de julio de 2015 del Libro IX
Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de la Accionista Único	02105975 del 23 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 14 del 18 de marzo de 2019 de la Accionista Único	02436957 del 19 de marzo de 2019 del Libro IX
Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de la Accionista Único	02949409 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6201
Actividad secundaria Código CIIU: 6910
Otras actividades Código CIIU: 6810

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

Página 7 de 9

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de registros de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

PC078933215

08-02-23 PC078933215

VDSSOMINZOB

THOMAS GREGG & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Secreto No. 2023067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: R2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario PUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del PUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de junio de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de marzo de 2023. A la vez Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMMLV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 82306704465425

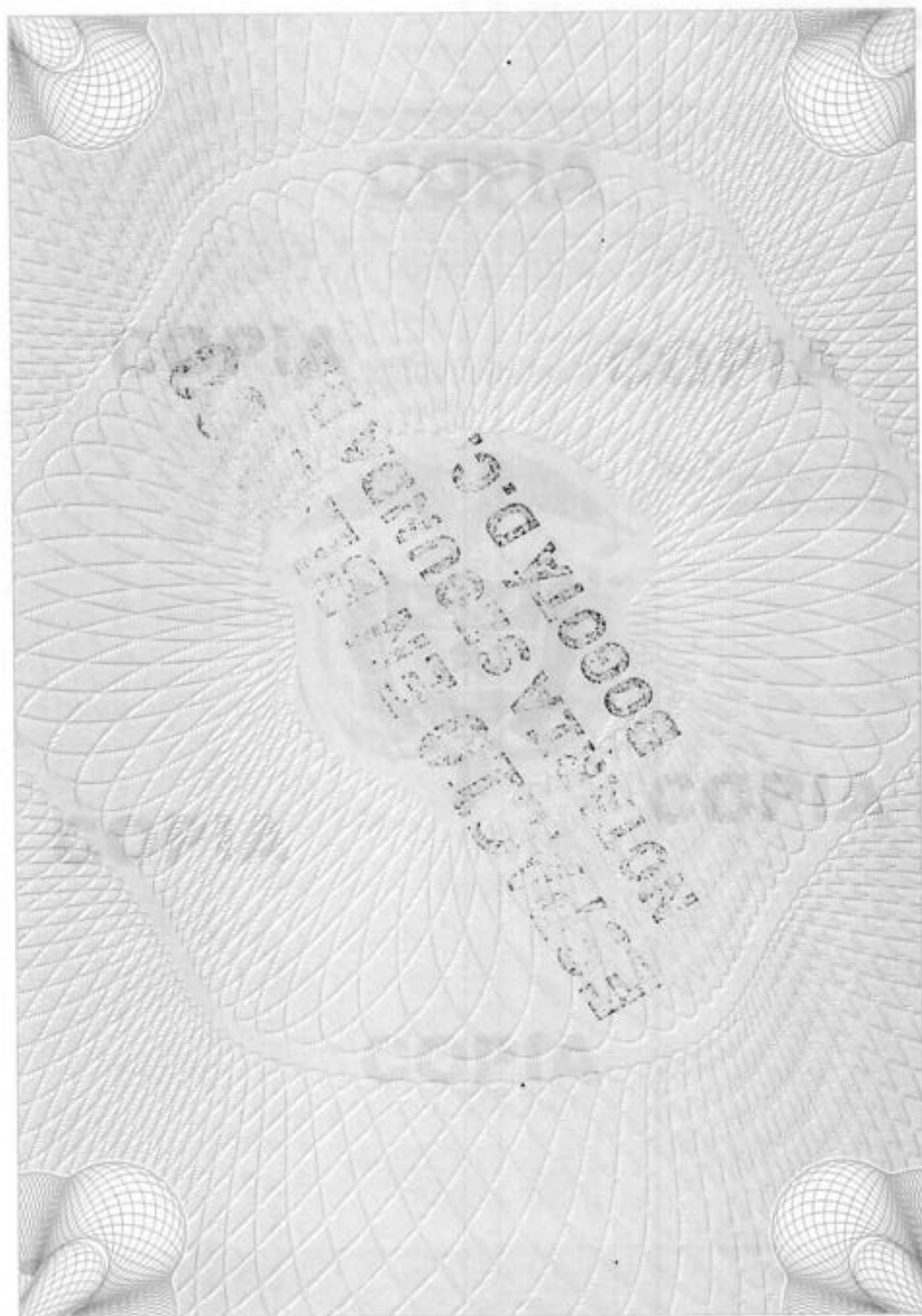
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 3150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Constanza Puentes Trujillo
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



PC078933214



100 EURO

100 EURO

100 EURO

100 EURO



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto **03** Activación

4. Número de formulario

14900433611



4331707232469940020 0000014900433611

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. División sectorial

0 0 0 4 4 2 2 2 3

7

3-2

14. Fuente electrónica

IDENTIFICACIÓN

1. Tipo de contribuyente

2. Tipo de entidad

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

3. Fecha de expedición

28. País

29. Departamento

4. País

30. Ciudad/capital

5. Primer apellido

31. Segundo apellido

32. Primer nombre

6. Primer nombre

33. Último nombre

7. Primer sueldo

8. Último sueldo

9. Correo electrónico

10. Teléfono comercial

UBICACIÓN

11. País

34. Departamento

35. Ciudad/capital

12. País

36. Departamento

37. Ciudad/capital

13. País

38. Departamento

39. Ciudad/capital

14. País

40. Departamento

41. Ciudad/capital

15. País

42. Departamento

43. Ciudad/capital

16. País

44. Departamento

45. Ciudad/capital

17. País

46. Departamento

47. Ciudad/capital

18. País

48. Departamento

49. Ciudad/capital

19. País

50. Departamento

51. Ciudad/capital

20. País

52. Departamento

53. Ciudad/capital

21. País

54. Departamento

55. Ciudad/capital

22. País

56. Departamento

57. Ciudad/capital

23. País

58. Departamento

59. Ciudad/capital

24. País

60. Departamento

61. Ciudad/capital

25. País

62. Departamento

63. Ciudad/capital

26. País

64. Departamento

65. Ciudad/capital

27. País

66. Departamento

67. Ciudad/capital

28. País

68. Departamento

69. Ciudad/capital

29. País

70. Departamento

71. Ciudad/capital

30. País

72. Departamento

73. Ciudad/capital

31. País

74. Departamento

75. Ciudad/capital

32. País

76. Departamento

77. Ciudad/capital

33. País

78. Departamento

79. Ciudad/capital

34. País

80. Departamento

81. Ciudad/capital

35. País

82. Departamento

83. Ciudad/capital

36. País

84. Departamento

85. Ciudad/capital

37. País

86. Departamento

87. Ciudad/capital

38. País

88. Departamento

89. Ciudad/capital

39. País

90. Departamento

91. Ciudad/capital

40. País

92. Departamento

93. Ciudad/capital

41. País

94. Departamento

95. Ciudad/capital

42. País

96. Departamento

97. Ciudad/capital

43. País

98. Departamento

99. Ciudad/capital

44. País

100. Departamento

101. Ciudad/capital

45. País

102. Departamento

103. Ciudad/capital

46. País

104. Departamento

105. Ciudad/capital

47. País

106. Departamento

107. Ciudad/capital

48. País

108. Departamento

109. Ciudad/capital

49. País

110. Departamento

111. Ciudad/capital

50. País

112. Departamento

113. Ciudad/capital

51. País

114. Departamento

115. Ciudad/capital

52. País

116. Departamento

117. Ciudad/capital

53. País

118. Departamento

119. Ciudad/capital

54. País

120. Departamento

121. Ciudad/capital

55. País

122. Departamento

123. Ciudad/capital

56. País

124. Departamento

125. Ciudad/capital

57. País

126. Departamento

127. Ciudad/capital

58. País

128. Departamento

129. Ciudad/capital

59. País

130. Departamento

131. Ciudad/capital

60. País

132. Departamento

133. Ciudad/capital

61. País

134. Departamento

135. Ciudad/capital

62. País

136. Departamento

137. Ciudad/capital

63. País

138. Departamento

139. Ciudad/capital

64. País

140. Departamento

141. Ciudad/capital

65. País

142. Departamento

143. Ciudad/capital

66. País

144. Departamento

145. Ciudad/capital

67. País

146. Departamento

147. Ciudad/capital

68. País

148. Departamento

149. Ciudad/capital

69. País

150. Departamento

151. Ciudad/capital

70. País

152. Departamento

153. Ciudad/capital

71. País

154. Departamento

155. Ciudad/capital

72. País

156. Departamento

157. Ciudad/capital

73. País

158. Departamento

159. Ciudad/capital

74. País

160. Departamento

161. Ciudad/capital

75. País

162. Departamento

163. Ciudad/capital

76. País

164. Departamento

165. Ciudad/capital

77. País

166. Departamento

167. Ciudad/capital

78. País

168. Departamento

169. Ciudad/capital

79. País

170. Departamento

171. Ciudad/capital

80. País

172. Departamento

173. Ciudad/capital

81. País

174. Departamento

175. Ciudad/capital

82. País

176. Departamento

177. Ciudad/capital

83. País

178. Departamento

179. Ciudad/capital

84. País

180. Departamento

181. Ciudad/capital

85. País

182. Departamento

183. Ciudad/capital

86. País

184. Departamento

185. Ciudad/capital

87. País

186. Departamento

187. Ciudad/capital

88. País

188. Departamento

189. Ciudad/capital

89. País

190. Departamento

191. Ciudad/capital

90. País

192. Departamento

193. Ciudad/capital

91. País

194. Departamento

195. Ciudad/capital

92. País

196. Departamento

197. Ciudad/capital

93. País

198. Departamento

199. Ciudad/capital

94. País

199. Departamento

200. Ciudad/capital

95. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

96. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

97. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

98. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

99. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

100. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

100. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

100. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital

100. País

200. Departamento

200. Ciudad/capital</

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



5. Número de identificación tributaria (RUT)

9 0 0 4 4 2 2 2 3 7

6. DV

12. Operación económica
Inversión en Bienes

14. Códigos electrónicos

Características y forma de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades instituidas por ley o decreto de carácter nacional, departamental, provincial o municipal

65. Cooperativas

66. Sociedades y organismos
afiliados

67. Otros

1

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 1

73. Fecha

0 0 1 4

74. Número de acta

2 0 2 2 1 2 3 0

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

0 3

77. Ins. Matricula mercantil

2 0 1 1 0 0 0 7

78. Departamento

0 2 1 0 6 1 0 3

79. Ciudad/Ubicación

1 1

4

82. Estructura

1 0 0 %

83. Nacionalidad

0 0 %

84. Nacionalidad

1 0 0 0 %

85. Estructura

0 %

86. Estructura pública

0 0 %

87. Estructura privada

0 0 %

Vigencia

88. Desde

2 0 1 1 0 0 0 1

89. Hasta

2 0 0 0 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

90. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Detalle

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de identificación tributaria (RUT)

92. DV

1

0 1

2 0 1 5 0 1 0 1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Forma del grupo asociativo y/o empresarial

95. Empresa de la identificación tributaria (RUT) de la
Unidad y Controlada

96. DV

97. Forma y número social de la entidad o contribuyente

98. Número de identificación tributaria
Leyenda anexo 6 al artículo 17

99. País

100. Número de identificación tributaria
asociada a esta al del exterior con EP101. Número de identificación tributaria
asociada a esta al del exterior con EP

Fecha generación del documento: PCF-02-49-2022-V-32-10-16



DIAN
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINES

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Español reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



0413072072324899641001018000014909433611

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección electrónica

9 0 - 0 4 4 2 2 2 3

7

Provincia de Bogotá

3 - 2

13. Estado electrónico

Representación

8. Representación

REPRS LEGAL PRPE

1 0

9. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 2 - 1 2 - 3 0

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 0 2 6 2 7 5 3 9 1

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

PEREZ

105. Segundo apellido

OLIVEROS

106. Primer nombre

MARIA

107. Otros nombres

CAMILA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. DV

116. Razón social representante legal

9. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1 0

9. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 2 - 0 3 - 1 8

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. DV

116. Razón social representante legal

9. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1 0

9. Fecha inicio ejercicio representación

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. DV

116. Razón social representante legal

9. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1 0

9. Fecha inicio ejercicio representación

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. DV

116. Razón social representante legal

9. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1 0

9. Fecha inicio ejercicio representación

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. DV

116. Razón social representante legal

Fecha generación documento PCP: 02-05-2023 09:33:16.3

PC078933212

08-02-23 PC078933212

OBXJUEMPAC

THOMAS GARCIA & ASOCIADOS

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900433611



5. Número de Identificación Tributaria (RIT)

6. DV

12. Dirección personal
Inmueble en Bogotá

11. Cédula electrónica

0 0 0 4 4 2 2 2 3 7

0 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (RIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de constitución			
Contador fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (RIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de constitución			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 1 1 1 0 - 7 1		2 1 3 4 3 4 7
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ALVAREZ	REYES	MARITZA	ANTONIO
156. Número de Identificación Tributaria (RIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de constitución	2 0 2 3 0 4 0 1			

República de Colombia

5

ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

DE FECHA:

DIECISIETE (17) DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA

(2a.) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

C.C.No. 79983390

TEL o CEL. 3004919939

DIR. Carrera 15 # 170-81

CIUDAD: Bogotá

E-MAIL. daurego@colpensiones.gov.co

PROFESIÓN U OFICIO: Abogado

OBRA en su condición de Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7

DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO

NOTARIO SEGUNDO (2º) ENCARGADO DE BOGOTÁ, D.C.

Esta notaría para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el notario

PB
RAD1244

N2

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Leovedis Elías Martínez Durán
Notario



HACE CONSTAR

QUE EL PODER CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA 1186 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DEL AÑO 2023 CUYA PRESENTE COPIA ES FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLO.

QUE A LA FECHA SE PRESUME VIGENTE CON LAS FACULTADES A EL INHERENTES, POR CUANTO EN EL ORIGINAL DEL INSTRUMENTO CITADO, NO FIGURA NOTA ALGUNA DE REVOCATORIA, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN O ACLARACIÓN, NI LIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES Y EN GENERAL NINGUNA SITUACIÓN QUE LA AFECTE EN ALGÚN SENTIDO

ES LA COPIA NÚMERO DOS (02) EXPEDIDA EN CATORCE (05) HOJAS ÚTILES CON DESTINO AL INTERESADO.

DADA EN BOGOTÁ D.C. EL DÍA DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL AÑO 2023.



DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
(ENCARGADO)

NOTA. Cualquier cambio o modificación que se realice sobre estas copias sin la autorización e intervención del notario conforme a la ley es ilegal y utilizarlas puede causar sanción penal.

Carrera 13 No. 64-29
www.notaria2bogota.com
PBX 3000861



PC078933210

08-02-23 PC078933210

7EF9XL2PT15

THOMAS LINDS & LINDS





REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO

1085313938

APELLIDOS Y NOMBRES
MORA RODRIGUEZ

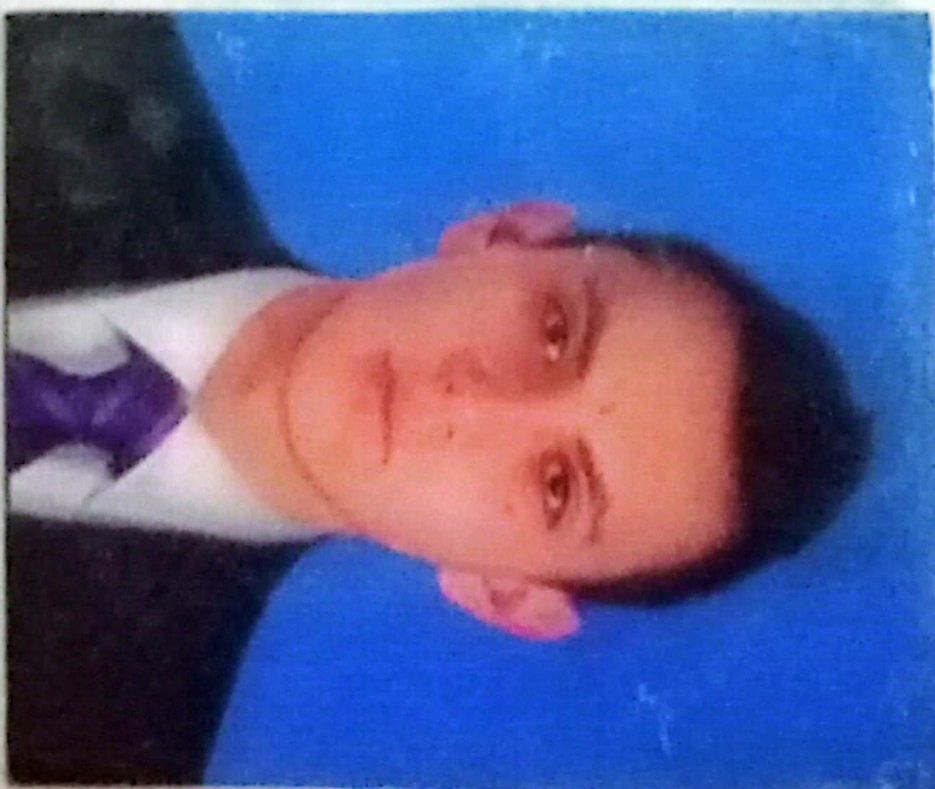
KEVIN DAVID

PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA	2ª LÍNEA	3ª LÍNEA
31 - DIC 2024	31 - DIC 2034	31 - DIC 2044

PROFESIÓN **BACHILLER**

FECHA DE EXP: **04 JUL 2014**



CDTE DE DISTRITO

[Firma]